

AGROTÓXICOS : UN RIESGO SILENCIOSO, UN DAÑO MINUCIOSO REFLEXIONES DESDE LA ENFERMERÍA SOBRE EL DAÑO AMBIENTAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS SALUDABLES

AGROTOXINS : A SILENT RISK, A SUBTLE HARM REFLECTIONS FROM NURSING ON ENVIRONMENTAL DAMAGE AND THE CONSTRUCTION OF HEALTHY TERRITORIES

Est. María Celeste Casamayor

mariacelestecasamayor@gmail.com // <https://orcid.org/0009-0003-4137-7429>

Est. Natalia Silvia Baró

nataliasbaro@gmail.com // <https://orcid.org/0009-0002-0982-6215>

Est. Nahara Nicole Del Pino

naharadelpino@mdp.edu.ar // <https://orcid.org/0009-0006-5887-495X>

Est. María Soledad Godoy

soledad.godoy@mdp.edu.ar // <https://orcid.org/0009-0002-5287-2882>

Est. Daniela Roggio

daniroggio54@gmail.com // <https://orcid.org/0009-0008-1386-3207>

Filiación Institucional:

Departamento de Enfermería/Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social/
Universidad Nacional de Mar del Plata

Fecha de presentación: 30/10/2025

Fecha de aceptación: 16/12/2025

Resumen

El presente ensayo analiza el impacto del uso intensivo e indiscriminado de agroquímicos en zonas rurales de Mar del Plata. A partir de la experiencia personal y de la revisión de diversos artículos científicos, se examinan las consecuencias en la salud humana, particularmente en trabajadores agrícolas y comunidades aledañas, así como los efectos ambientales que generan vulnerabilidad socioambiental.

Se evidencia la falta de cumplimiento de normativas, la insuficiencia de controles estatales y la carencia de campañas de prevención y educación en salud. Se plantea la necesidad de un abordaje interdisciplinario, en el cual la enfermería asuma un rol activo en la promoción de prácticas seguras, la concientización comunitaria y el registro sistematizado de los problemas de salud asociados a la exposición a agrotóxicos.

Asimismo, se destaca la urgencia de implementar políticas públicas rigurosas y la importancia de la participación comunitaria para garantizar la protección de la salud y del ambiente en contextos rurales.

Palabras clave: Agroquímicos, Enfermería, Vulnerabilidad, Políticas públicas, Interdisciplinaria.

Abstract

This essay analyzes the impact of the intensive and indiscriminate use of agrochemicals in rural areas of Mar del Plata. Drawing on personal experience and a review of various scientific articles, it examines the consequences for human health, particularly among agricultural workers and nearby communities, as well as the environmental effects that generate socio-environmental vulnerability.

The study highlights the lack of compliance with existing regulations, the insufficiency of governmental oversight, and the absence of prevention and health education campaigns. It emphasizes the need for an interdisciplinary approach in which nursing assumes an active role in promoting safe practices, fostering community awareness, and systematically recording health problems associated with exposure to agrotoxins.

Moreover, the essay underscores the urgency of implementing rigorous public policies and the importance of community participation to ensure the protection of both health and the environment in rural settings.

Keywords: Agrochemicals, Nursing, Vulnerability, Public policies, Interdisciplinarity.

I- Introducción

En la actualidad, el uso intensivo de agroquímicos en la producción agrícola, se ha consolidado como una práctica habitual en gran parte del territorio argentino, se han transformado los modelos de producción y al mismo tiempo, estos han generado graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

Este ensayo busca analizar el impacto que genera el empleo indiscriminado de estos químicos en zonas rurales de la ciudad de Mar del Plata y sus zonas periurbanas, donde las fumigaciones frecuentes y la ausencia de controles eficaces evidencian una problemática que trasciende lo ambiental para instalarse como una cuestión sanitaria y social de gran relevancia. El aumento de su aplicación pone en riesgo la salud de la comunidad, afectando en especial medida a trabajadores agrícolas y poblaciones aledañas a zonas de aplicación agroquímica.

Desde una perspectiva en Salud Colectiva, la problemática exige un compromiso de abordaje interdisciplinario, donde la enfermería cumpla un rol fundamental en la prevención y promoción de la salud, brindando información clara e implementando acciones comunitarias. Teniendo como propósito, exponer las repercusiones que genera el uso de agroquímicos en la salud, y destacando la necesidad de políticas públicas rigurosas y comprometidas, sumando la colaboración

efectiva entre profesionales de la salud, agrónomos y los distintos actores sociales involucrados y afectados por mencionada problemática.

Debido al compromiso como disciplina, la enfermería debe priorizar el bienestar comunitario, asumiendo un papel activo en esta problemática y concientizar sobre los riesgos asociados al uso de los agroquímicos. Se debe analizar el contexto actual en el uso de estos productos y desde ahí, cuestionar y plantear ¿Cómo desde el sector salud se puede trabajar interdisciplinariamente para mitigar daños? ¿Cuánto se realiza desde la enfermería para dar relevancia a la problemática?

Este ensayo pretende visibilizar un problema silenciado y aportar a la construcción de un pensamiento crítico que vincule la salud con el ambiente, reconociendo que la defensa de la vida y del territorio forma parte esencial del quehacer enfermero. Nos proponemos generar conciencia colectiva, promover la participación comunitaria y contribuir a la creación de políticas públicas que garanticen entornos saludables y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.

2– Metodología

Este trabajo se enmarca en una revisión narrativa crítica con enfoque cualitativo y reflexivo. Se realizó un relevamiento bibliográfico en fuentes académicas nacionales y

latinoamericanas (SciELO, Redalyc, LILACS, Repositorios de la UNMDP y ANLIS) publicadas entre 2010 y 2025, seleccionando artículos, tesis y documentos institucionales vinculados a salud ambiental, vulnerabilidad y políticas públicas sobre el uso de agrotóxicos.

Además, el análisis incorpora la experiencia situada de la autora principal en el territorio de El Boquerón (Mar del Plata), que permitió contextualizar la problemática desde la práctica profesional y comunitaria. La lectura crítica de las fuentes se organizó en tres dimensiones: normativa, sanitaria y socio ambiental, articuladas con el rol de la enfermería en la promoción de territorios saludables.

Desde esta metodología, el ensayo busca integrar conocimiento científico, reflexión ética y experiencia local, situando la producción del saber en el campo de la enfermería latinoamericana.

3– Desarrollo

Normativas y su incumplimiento

En el sur de la ciudad de Mar del Plata, la actividad agrícola constituye una de las principales fuentes de sustento económico y configura un entramado productivo que sostiene gran parte del abastecimiento local.

Sin embargo, su desarrollo ha implicado la utilización intensiva de productos químicos que impactan directamente sobre la salud y el ambiente. El término “agrotóxico”, más allá de su definición técnica, representa una construcción social que expresa la percepción de riesgo de las comunidades expuestas, así como la disputa por el reconocimiento de los daños que estos compuestos generan en los territorios (Iturralde, 2014). De esta manera, la problemática trasciende el campo productivo para convertirse en un fenómeno social, político y sanitario, donde convergen los intereses económicos, las políticas ambientales y los derechos humanos.

En el Partido de General Pueyrredón, la Ordenanza N.º 21097 (que modifica y amplía la ordenanza N.º 18740) constituye el principal marco regulatorio local para el uso de agroquímicos. Esta norma establece la prohibición de aplicar, transportar y descartar plaguicidas de síntesis dentro de un radio de mil metros desde los límites urbanos, además de imponer la implementación obligatoria de

barreras vegetales como medida de mitigación.

Dicha ordenanza, también introduce la figura del “usuario responsable”, que extiende la responsabilidad legal a productores, aplicadores y operadores de maquinaria, e incorpora sanciones en caso de incumplimiento.

Un aspecto relevante de la misma es la creación de un Consejo de Monitoreo con participación de vecinos, organizaciones ambientales y técnicas, lo cual constituye un intento de democratizar la gestión ambiental local (Honorable Concejo Deliberante del PGP, 2012).

Sin embargo, los estudios de Molpeceres, Ceverio y Brieva (2017) advierten que la sola existencia de marcos normativos no garantiza su funcionamiento efectivo. La falta de fiscalización, la débil articulación institucional y la escasa participación de los actores territoriales en el diseño de las regulaciones, derivan en una baja implementación y en una pérdida de legitimidad social.

En este escenario, el interés económico tiende a prevalecer sobre la protección de la salud pública, generando una tensión estructural entre el modelo de producción intensiva y la sostenibilidad de los territorios.

Desde la experiencia comunitaria en El Boquerón, localidad situada al sur del partido Gral. Pueyrredón, se observa de manera concreta esta brecha entre la norma y la práctica. Las actividades agrícolas se desarrollan sin respetar las zonas de exclusión establecidas, realizándose fumigaciones en cercanía de viviendas habitadas y en horarios diurnos, incluso bajo condiciones climáticas inadecuadas.

No existen cercos forestales ni barreras vegetales que reduzcan la deriva de los productos hacia las zonas pobladas, y las fiscalizaciones municipales son esporádicas o directamente inexistentes. Estas prácticas evidencian un incumplimiento sistemático de la ordenanza y reflejan lo que Molpeceres (2020) denomina “fragilidad institucional” en la regulación de la horticultura periurbana.

Las políticas ambientales locales se ven atravesadas por disputas de poder, por la falta de control efectivo y por una tendencia a responsabilizar individualmente a los productores sin abordar los factores estructurales que sostienen el problema.

La distancia entre lo legislado y lo vivido en los territorios rurales y periurbanos, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la

gobernanza ambiental y de generar mecanismos participativos de control ciudadano que aseguren la transparencia y la continuidad de las políticas.

A nivel provincial, la Ley N.º 10.699 sobre “Protección de la Salud Humana, Recursos Naturales y la Producción Agrícola mediante el uso racional de productos químicos o biológicos” complementa el marco legal nacional al establecer un régimen de registro para fabricantes, distribuidores, aplicadores y depósitos.

Clasifica los productos según su nivel de riesgo y condiciona la venta y aplicación de los más peligrosos a la “Receta Agronómica Obligatoria”, regulada por el Ministerio de Asuntos Agrarios. La ley también promueve instancias de capacitación conjunta con el Ministerio de Salud y contempla inspecciones coordinadas con los municipios, intentando articular el control entre los distintos niveles del Estado.

Sin embargo, al igual que ocurre con las ordenanzas locales, su implementación depende de la voluntad política y de la capacidad técnica de los organismos de control, factores que suelen estar condicionados por la presión del sector productivo y la falta de recursos para fiscalizar.

En la práctica, las capacitaciones y los controles previstos por la ley son intermitentes, se desarrollan sin continuidad y alcanzan a un número limitado de actores, lo que reproduce un escenario de regulación formalmente sólida pero materialmente débil.

En paralelo, el Manual de horticultura periurbana elaborado por el INTA (2012) constituye una herramienta técnica que busca orientar a productores hacia prácticas más seguras y sostenibles. Este documento describe con detalle los procedimientos adecuados de manipulación de fitosanitarios, el uso correcto de equipos de protección personal (como guantes impermeables, botas altas, máscaras con filtros específicos, antiparras y trajes impermeables), y las medidas de higiene necesarias durante la preparación, aplicación y limpieza de equipos.

También recomienda realizar las cargas de productos a espaldas del viento, lavar los envases y mantener los equipos en condiciones óptimas. El manual aporta así especificaciones operativas que complementan los marcos normativos, traduciendo la legislación en

prácticas concretas de prevención.

Sin embargo, la eficacia de estas recomendaciones depende casi exclusivamente de la voluntad individual de quienes trabajan en el campo. En ausencia de mecanismos de control y acompañamiento, las buenas prácticas se transforman en responsabilidades subjetivas que dependen del grado de información, la disponibilidad económica y el compromiso de cada productor o aplicador.

De este modo, tanto la ley como el manual comparten una limitación estructural: delegan el cumplimiento de las medidas preventivas en los mismos actores que deberían ser supervisados, reproduciendo un modelo de autorregulación ineficiente ante los riesgos ambientales y sanitarios.

Consecuencias en la salud

La exposición a agrotóxicos constituye un riesgo sanitario comprobado. Diversos estudios científicos han demostrado que el contacto directo o indirecto con estos compuestos se asocia con enfermedades respiratorias, dérmicas, neurológicas y oncológicas (García, 2020; Andreo-Martínez et al., 2021).

La exposición puede producirse por inhalación durante la fumigación, por contacto dérmico o a través del consumo de alimentos y agua contaminados.

Desde la experiencia comunitaria en El Boquerón, puede observarse que gran parte de trabajadores rurales manipulan estos productos sin medidas de protección adecuadas ni conocimiento sobre su toxicidad. En numerosas ocasiones, se reemplaza la capacitación formal por creencias empíricas, como la idea de que consumir leche o yogurt “limpia el organismo” tras el contacto con agroquímicos, lo cual evidencia una profunda carencia educativa y sanitaria.

Tal situación, además de demostrar la ausencia de control estatal, refleja lo señalado por Lucero (2022), quien subraya que la escasa formación en toxicología y epidemiología popular de los profesionales de la salud contribuye a la subestimación de los efectos de los plaguicidas en la población.

Los servicios sanitarios locales no contemplan estrategias específicas de prevención o seguimiento de la exposición

crónica. En el centro de atención primaria del barrio, las consultas por sintomatología respiratoria o dérmica suelen ser tratadas de forma general, sin indagar en la exposición ambiental de las personas. De este modo, las patologías derivadas del contacto con agroquímicos permanecen invisibilizadas y sin registro epidemiológico.

En investigaciones recientes, García (2020) plantea que los agrotóxicos afectan el sistema inmune mediante procesos de determinación social de la salud, en los cuales se entrelazan factores estructurales, laborales y ambientales. La salud no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como un proceso social e histórico influido por las condiciones de vida y trabajo.

Los efectos de estas sustancias no se limitan al ámbito ocupacional. En comunidades rurales donde las fumigaciones son frecuentes, la contaminación del aire, el suelo y el agua genera exposición continua, incluso en personas que no trabajan directamente con los productos.

El consumo de agua proveniente de pozos someros sin control sanitario representa otro riesgo latente, dado que la infiltración de pesticidas y de residuos cloacales sin tratamiento contamina las napas freáticas.

Esta problemática local se alinea con los hallazgos de Molpeceres (2023), quienes evidenciaron impactos sanitarios y ausencia de registros oficiales en las zonas rurales del sur de Mar del Plata.

Por lo tanto, las consecuencias en la salud derivadas del uso de agrotóxicos deben entenderse como expresión de una vulnerabilidad estructural, donde la falta de educación, la precariedad laboral y la deficiencia institucional confluyen en la perpetuación del daño sanitario.

Vulnerabilidad socioambiental

La vulnerabilidad socioambiental constituye una categoría clave para comprender cómo los riesgos ambientales se entrelazan con las condiciones sociales, económicas y políticas de las comunidades.

Este enfoque permite reconocer que los impactos derivados de la degradación ambiental no afectan a todos los grupos por igual, sino que se distribuyen según estructuras históricas de desigualdad. Tal como señalan Cabral y Zulaica (2015), la vulnerabilidad remite a la capacidad

limitada de una población y su entorno para resistir o adaptarse frente a los riesgos, revelando la interacción entre factores materiales y simbólicos que condicionan la posibilidad de respuesta.

En el periurbano de Mar del Plata, esta condición se agudiza por la convergencia de pobreza estructural, irregularidad en la tenencia de la tierra y carencia de infraestructura básica, configurando territorios donde la exposición a los riesgos ambientales se potencia y multiplica.

Desde la experiencia comunitaria en El Boquerón, al sur de la ciudad, estas condiciones se observan con claridad. Muchas de las viviendas carecen de acceso a la red de agua potable y al sistema de cloacas, lo que obliga a la población a depender de pozos y sistemas de saneamiento precarios. La falta de control sobre la calidad del agua, sumada a la cercanía entre los pozos ciegos y los pozos de extracción, incrementa el riesgo de contaminación y genera una situación de vulnerabilidad sanitaria persistente.

A ello se suma el uso intensivo de agroquímicos en las zonas de producción hortícola, lo que agrava los efectos de la exposición ambiental sobre un territorio que ya se encuentra debilitado por la carencia de servicios esenciales.

La conjunción de estas variables evidencia que la vulnerabilidad no es sólo producto de factores naturales, sino el resultado de procesos sociales acumulativos y desiguales que determinan quiénes están más expuestos y quiénes cuentan con mayores capacidades de protección.

La vulnerabilidad socioambiental también se expresa en el plano simbólico y cultural. Como advierte Iturralde (2014), la percepción del riesgo no depende únicamente de la información científica disponible, sino de las condiciones de vida, las tradiciones locales y las necesidades económicas que moldean las actitudes de las comunidades frente al peligro. Cuando la actividad agrícola constituye la principal fuente de sustento, el umbral de tolerancia al riesgo se eleva, y prácticas peligrosas (como las fumigaciones cercanas a viviendas) tienden a naturalizarse. Este fenómeno de aceptación social del riesgo revela la dimensión subjetiva de la vulnerabilidad, que resignaciones frente a situaciones que ponen en peligro la vida cotidiana.

En el Boquerón, la agricultura intensiva representa el medio de vida de numerosas familias; por eso, la exposición a plaguicidas suele ser asumida como parte inevitable de la cotidianidad, aun cuando exista conocimiento de sus consecuencias sobre la salud.

Molpeceres y colaboradores (2023) evidencian que las zonas más próximas a los cinturones de producción hortícola intensiva presentan mayores niveles de riesgo ambiental y sanitario, producto de las deficiencias habitacionales, la precariedad laboral y la ausencia de control estatal. A su vez, la expansión desordenada de los asentamientos, sin planificación urbana ni servicios adecuados, incrementa la exposición de las poblaciones vulnerables.

Esta situación coincide con el análisis de Zulaica y Bocero (2015), quienes describen el periurbano marplatense como un espacio de interfase entre lo urbano y lo rural, caracterizado por la superposición de dinámicas sociales, productivas y ambientales en constante tensión.

En estos territorios frágiles, la presión del modelo agroindustrial y la ausencia de políticas integrales configuran un escenario de alta conflictividad socioambiental, donde los límites entre lo productivo y lo habitable se difuminan.

Desde una mirada analítica, la vulnerabilidad socioambiental no puede ser entendida como un estado fijo, sino como el resultado de un proceso histórico de desigualdad acumulada. Se trata de una construcción social que combina factores estructurales, como la pobreza, la informalidad laboral o la falta de infraestructura, con factores institucionales, tales como la debilidad de las políticas públicas y la ineficiencia de los mecanismos de control ambiental.

Cuando las instituciones no logran garantizar condiciones básicas de habitabilidad y protección, las comunidades quedan expuestas a múltiples riesgos sin recursos suficientes para afrontarlos. En este contexto, la vulnerabilidad se profundiza y se reproduce, generando un círculo que vincula el deterioro ambiental con la exclusión social.

La perspectiva propuesta por Florencia Luna resulta útil para comprender esta dinámica, ya que la autora concibe la vulnerabilidad como una estructura en “capas”. Cada persona y cada comunidad portan diferentes capas de

vulnerabilidad que se activan o refuerzan según las circunstancias vitales y contextuales.

En las comunidades periurbanas afectadas por los agrotóxicos, el nivel de adaptación y resistencia frente a los riesgos ambientales constituye una de esas capas, que se suma a otras, como la desigualdad económica, la falta de educación ambiental o la escasa representación política, conformando una cebolla social de múltiples estratos de exposición y fragilidad. Cuantas más capas se acumulan, mayor es la dificultad para generar estrategias de protección y transformación.

Las zonas periurbanas, en este sentido, no deben ser comprendidas como espacios residuales ni marginales, sino como territorios estratégicos donde confluyen procesos rurales y urbanos en permanente interacción.

Zulaica y colaboradores (2015) señalan que el periurbano constituye una zona de interfase sujeta a transformaciones constantes, donde se evidencian los desajustes en la relación sociedad-naturaleza. Es precisamente en esta interfase donde se hacen visibles las contradicciones de un modelo de desarrollo que prioriza la expansión económica sobre el bienestar colectivo.

El abandono estatal, la falta de políticas de salud y la débil fiscalización de las actividades agrícolas refuerzan la desigualdad ambiental, dejando a las comunidades en situación de desprotección frente a los efectos de los plaguicidas, la contaminación del agua y el deterioro de los suelos.

Esta realidad pone de manifiesto la supremacía del poder económico sobre el bienestar socioambiental de las poblaciones periurbanas. La búsqueda del crecimiento productivo, sostenida en la lógica del mercado, se impone sobre las necesidades de salud, vivienda y calidad de vida de quienes habitan los territorios rurales.

Resulta pertinente, entonces, interrogar si el modelo actual privilegia realmente el bienestar social o si continúa subordinando la vida de las comunidades a los intereses del capital agrario. Esta pregunta interpela no solo a los gobiernos, sino también a la sociedad en su conjunto, al evidenciar la naturalización de prácticas que comprometen el futuro ambiental y humano. Frente a esta situación, la participación ciudadana emerge como un componente esencial para visibilizar las múltiples formas de vulnerabilidad presentes en las

comunidades afectadas.

Las organizaciones barriales, los colectivos ambientales y los equipos de salud comunitaria desempeñan un papel fundamental en la denuncia, el registro y la producción de saberes locales que permiten enfrentar el problema desde una perspectiva de salud colectiva.

Cuando las instituciones estatales no alcanzan a garantizar la protección ambiental, son las propias comunidades las que se organizan para exigir el cumplimiento de las normas, generar conciencia y construir alternativas.

Sin embargo, estas acciones suelen enfrentarse a la resistencia de los sectores económicos dominantes y a la falta de apoyo institucional sostenido, lo que limita su alcance y continuidad.

Rol de enfermería e interdisciplina

El abordaje de la problemática de los agrotóxicos requiere una mirada integral que articule los saberes sanitarios, sociales y ambientales. La complejidad del fenómeno, que involucra determinantes económicos, políticos y culturales, demanda un enfoque interdisciplinario capaz de vincular la evidencia científica con la experiencia comunitaria.

En este entramado, la enfermería ocupa un rol estratégico por su compromiso ético con la vida, la promoción de la salud y su cercanía con los territorios afectados.

El trabajo de Lucero (2022) subraya la necesidad de que los profesionales de la salud, especialmente quienes se desempeñan en el primer nivel de atención, incorporen la dimensión ambiental en sus prácticas cotidianas.

Esto implica reconocer que las condiciones del entorno, como el uso de agroquímicos, la calidad del agua o el tipo de vivienda, influyen directamente en el proceso salud-enfermedad. En consecuencia, registrar la exposición a agrotóxicos como parte de la historia clínica resulta una herramienta fundamental para visibilizar los riesgos y orientar acciones preventivas.

Desde la experiencia comunitaria en El Boquerón, se evidencia una marcada ausencia de intervenciones sostenidas en materia de prevención y educación ambiental por parte del sistema de salud. Esta falta de respuesta institucional contrasta con los postulados de la

epidemiología crítica (García, 2020), la cual concibe la salud como un proceso histórico y social atravesado por las condiciones de vida.

Bajo esta perspectiva, el personal sanitario no debe limitarse a un rol asistencial, sino asumir una función transformadora orientada a la justicia social y ambiental. La enfermería, por su inserción territorial y contacto directo con las comunidades rurales, puede desempeñar un papel clave en la detección temprana de síntomas asociados a la exposición a agrotóxicos, la educación sanitaria y la promoción de prácticas seguras.

A través de la escucha activa, el acompañamiento y la construcción de vínculos de confianza, lxs profesionales de enfermería se convierten en actores esenciales para identificar problemáticas naturalizadas dentro del sistema sanitario y darles visibilidad.

El impacto sanitario del uso de agrotóxicos es amplio: abarca afecciones respiratorias, neurológicas, dermatológicas y oncológicas, entre otras. Estas consecuencias no pueden abordarse únicamente desde la clínica individual, sino que requieren acciones preventivas, educativas y comunitarias.

Por ello, el trabajo en red entre enfermería, medicina, agronomía, toxicología, trabajo social y educación constituye una estrategia indispensable para comprender las causas y consecuencias del problema en toda su complejidad.

La interdisciplinariedad permite integrar diagnósticos, registros, educación y seguimiento, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y generando datos que fundamenten políticas públicas locales.

En esta línea, registrar las condiciones de vivienda, la calidad de las fuentes de agua y la proximidad a zonas de fumigación en las historias clínicas se vuelve una herramienta de gran valor para identificar determinaciones sociales y ambientales del proceso salud-enfermedad.

Asimismo, la incorporación de especialidades como neumología, dermatología y neurología en los centros de salud del área sería clave para mejorar la detección y el tratamiento de patologías asociadas a la exposición crónica.

Estas acciones requieren del compromiso institucional y de la capacitación continua del personal, pero también del fortalecimiento del rol comunitario de la enfermería, que puede actuar como puente

entre la población y las instituciones sanitarias.

Desde una perspectiva crítica, el cuidado que ofrece la enfermería trasciende la atención individual para convertirse en una herramienta de resistencia frente a los modelos de producción que amenazan la salud y el ambiente. Al promover el empoderamiento comunitario, impulsar la participación social y fomentar la apropiación del conocimiento sobre los riesgos ambientales, la enfermería contribuye a construir una ciudadanía activa y consciente de sus derechos.

La práctica del cuidado, entendida de este modo, no se realiza de manera aislada, sino que se nutre de la colaboración con otros saberes y disciplinas. Ningún campo profesional, por sí solo, puede ofrecer respuestas completas ante los efectos de los agrotóxicos. Por ello, el trabajo conjunto entre sectores de la salud, la educación, la agronomía y las políticas públicas se presenta como una necesidad urgente para avanzar hacia un modelo de atención integral y ambientalmente justo.

La interdisciplina no solo potencia la comprensión del problema, sino también la capacidad de liderazgo y acción colectiva de los equipos de salud. Permite diseñar estrategias de educación popular en salud, protocolos de prevención y programas de vigilancia epidemiológica que respondan a las particularidades de cada territorio. La enfermería, desde su enfoque humanista y su cercanía cotidiana con las comunidades, se posiciona como un actor fundamental para articular estos procesos.

Desde la experiencia de trabajo en El Boquerón, se observa que la falta de políticas sostenidas en salud ambiental genera una sensación de desprotección y desinterés institucional. Sin embargo, el contacto directo con las familias, el conocimiento de las prácticas agrícolas locales y la comprensión de las dinámicas comunitarias ofrecen a la enfermería herramientas valiosas para actuar de manera preventiva y educativa. Registrar, acompañar y educar se convierten así en actos de resistencia que reafirman el compromiso ético de la profesión con la defensa de la vida.

En suma, la problemática de los agrotóxicos demanda un modelo de atención basado en la interdisciplinariedad, la integralidad y la justicia ambiental. La enfermería, en tanto disciplina orientada al cuidado de la vida, tiene la responsabilidad de impulsar prácticas que

promuevan territorios saludables y sustentables. Su rol como mediadora entre el conocimiento científico y la experiencia comunitaria la ubica en un lugar privilegiado para promover transformaciones reales en la salud colectiva.

Enfrentar el impacto de los agrotóxicos implica reconocer que la salud no puede separarse del ambiente ni de las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan. La enfermería, con su mirada integral y su compromiso ético, puede liderar procesos de sensibilización, educación y cambio que permitan construir comunidades más seguras y conscientes. La defensa de la vida y del ambiente, en este sentido, no solo es una tarea sanitaria, sino también un acto político y social que interpela a todo el sistema de salud.

4- Conclusión

La problemática del uso de agrotóxicos en las zonas rurales de Mar del Plata constituye un desafío complejo que demanda respuestas urgentes y coordinadas. La falta de cumplimiento de las normativas, la débil fiscalización y la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades agravan los riesgos sanitarios y ambientales, evidenciando la necesidad de un abordaje integral que trascienda los límites del sector sanitario.

Resulta prioritario implementar un registro formal y sistemático en las historias clínicas que incorpore información sobre el entorno de vida de las personas (riesgos físicos, químicos, biológicos y sociales, calidad del agua, vivienda y saneamiento). Este recurso permitiría visibilizar los impactos de las fumigaciones, generar evidencia epidemiológica y orientar intervenciones más efectivas.

A su vez, es imprescindible fortalecer las políticas públicas que regulen el uso de agroquímicos, garanticen la fiscalización y promuevan modelos productivos sostenibles. Dichas políticas deben sustentarse en la interdisciplinariedad y en la articulación entre se traduce en silencios, negaciones o salud, ambiente y producción, reconociendo a las comunidades rurales como actores centrales en la construcción de soluciones.

Finalmente, la participación comunitaria emerge como un pilar indispensable. Involucrar a la población en la identificación de riesgos, en la elaboración de estrategias preventivas y en la producción de información local constituye

constituye una vía concreta hacia la justicia socioambiental. Solo desde la acción colectiva y el compromiso institucional será posible

construir un futuro más saludable y sostenible para las comunidades expuestas a los agrotóxicos.

5- Referencias bibliográficas

- Andreo-Martínez, P., Navarro-González, I., & García-Martínez, N. (2021). Residuos de plaguicidas y el trastorno del espectro autista. *Revista de Discapacidad, Clínica y Neurociencias*, 8(1), 39–51. <https://doi.org/10.14198/DCN.19750>
- Bour, R. (2020). Movimientos socio-territoriales vinculados a la problemática del uso de agrotóxicos en el partido de General Pueyrredón: El caso de Paren de Fumigarnos [Tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires]. Universidad de Buenos Aires.
- Cabral, V. N., & Zulaica, L. (2015). Análisis de la vulnerabilidad socioambiental en áreas del periurbano de Mar del Plata (Argentina) expuestas a agroquímicos. *Multiciencias*, 15(2), 172–180.
- García, C. H. (2020). Matriz de procesos críticos de la determinación social de la salud en la afectación al sistema inmune por exposición a agrotóxicos en La Paz, Bolivia. *Revista Ciencias de la Salud*, 18(Esp.), 1–17.
- Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. (2012). Ordenanza N.º 21097: Modificación de la Ordenanza 18740 sobre uso de agroquímicos. Mar del Plata, Argentina.
- Huape Padilla, A., Padilla Gil, A., Nieto del Valle, L., & Cortés Zabala, R. (2021). La vulnerabilidad socio-ambiental como pérdida de bienestar. *Revista de Psicología de la Universidad Autónoma de México*.
- Iturralde, R. S. (2014). La construcción social del riesgo y el conocimiento científico: Un estudio de caso sobre un conflicto socioambiental en 30 de Agosto, provincia de Buenos Aires. *Cuadernos de Antropología*, (12), 175–189.
- Lucero, P. A. (2022). El silencio no es salud: Prácticas y discursos sobre los profesionales de la salud en el partido de Junín (provincia de Buenos Aires) sobre el uso de agrotóxicos en la agricultura extensiva entre 2015 y 2018 [Tesis de grado].
- Lucero, P. A. (2025). La odisea de investigar sobre agrotóxicos en un contexto de agronegocios: Reflexiones metodológicas a partir de mis notas de campo.
- Luna, F. (2021). Vulnerabilidad: La metáfora de las capas. *Filosofía ULL*.
- Marinari, B. (2019). Percepciones del riesgo del uso de agroquímicos en el periurbano marplatense: Aportes conceptuales y problemática ambiental. En *XIII Jornadas de Sociología* (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
- Mitidieri, M. S., & Corbino, G. B. (2012). Manual de horticultura periurbana (1.ª ed.). San Pedro, Buenos Aires: Ediciones INTA. <https://inta.gob.ar/documentos/manual-de-horticultura-periurbana>
- Molpeceres, C. (2020). Horticultura periurbana en Mar del Plata: Trayectoria de su regulación. En *Agroquímicos y regulaciones en el periurbano marplatense* (Cap. 8, pp. 258–292). CONICET.
- Molpeceres, C. (2022). Políticas públicas y sistemas agroalimentarios en Argentina: Entre agroquímicos y agroecología (1990–2020). *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (21), 74–99. <https://doi.org/10.17141/eutopia.21.2022.5285>
- Molpeceres, M. C., Ceverio, R., & Brieva, S. (2017). Regulaciones y prácticas: Controversias en torno al uso de agroquímicos en el cinturón hortícola marplatense. *Redes*, 23(44), 103–131. <https://doi.org/10.48160/18517072re44.119>
- Molpeceres, M. C., Loyza, M. B., Zulaica, M. L., Calderón, G., & Mujica, C. M. (2023). Vulnerabilidad socioambiental, agroquímicos e impactos en la salud en el corredor costero y periurbano sur de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 39, 11–24. <https://doi.org/10.20937/RICA.54289>
- Provincia de Buenos Aires. (1988, 17 de noviembre). Ley 10699: Protección de la salud humana, recursos naturales y la producción agrícola mediante el uso racional de productos químicos o biológicos. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-10699-123456789-0abc-defg-996-0100bvorpyel/actualizacion>
- Zulaica, L., Bocero, S., Tribó, J., Cabral, V. N., Di Bona, A., Paz, M., & Tomadoni, M. (2015). Agroquímicos en áreas de transición urbano-rural: Problemas sociales y ambientales en el Partido de General Pueyrredón. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.